EXAMEN ADMINISTRATIVO PROMOCION INTERNA (PI-06/2025)

1.- El art. 21 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local señala: "EL alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones…" señale la opción incorrecta:

a. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.
b. Dirigir el gobierno y la administración municipal.
c. La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.

2.- En virtud del art. 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local "La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de concejales no superior …-" señale la opción correcta:

a. Al tercio del número legal de los mismos.
b. Al quinto del número legal de los mismos.
c. Al cuarto del número legal de los mismo.

3.- El art. 23.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local "Corresponde a la Junta de Gobierno Local…-" señale la opción correcta:

a. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
b. La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas
c. La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

4.- El artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece "En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:" señale la opción incorrecta:

a. Las personas jurídicas.
b. Las entidades con personalidad jurídica.
c. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

5.- El artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece: "Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:" señale la opción incorrecta:

a. En las oficinas de asistencia en materia de registros.
b. En las oficinas de Correos, en la forma que legalmente se establezca.
c. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

6- El artículo 71.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece: ": señale la opción correcta:

a. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de eficacia y eficiencia.
b. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de buena fe y confianza legítima.
c. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.

7.- Según el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la organización municipal responde a las siguientes reglas:

a. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.
b. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 50.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.
c. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios siempre y cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento

8.- Según el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿A qué órgano corresponde la aprobación definitiva de las ordenanzas?:

a. Al Pleno.
b. Al Alcalde.
c. A la Junta de Gobierno Local en los municipios de gran población recogidos en el Título X de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local.

9.- Según el artículo 79 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la clasificación de los bienes de las entidades locales:

a. Se clasifican en bienes de uso público, bienes de servicio público y bienes patrimoniales, careciendo los comunales de naturaleza demanial.
b. Se clasifican en bienes de dominio público y bienes patrimoniales, teniendo la consideración de comunales aquellos bienes cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos.
c. Se clasifican en bienes de dominio público, bienes comunales y bienes patrimoniales, constituyendo los comunales una categoría independiente.

10.- El artículo 126 de la Ley 7/1985, establece que, en los municipios de gran población, la Secretaría de la Junta de Gobierno Local corresponde a:

a. Al Secretario General del Ayuntamiento.
b. A uno de sus miembros que reúna la condición de concejal, designado por el Alcalde.
c. Al primer teniente de Alcalde

11.- Según el artículo 84.1 y 2 de la Ley 39/2015, pondrán fin al procedimiento:

a. La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.
b. No producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.
c. La resolución que se dicte no deberá ser motivada

12.- Según el artículo 114 de la Ley 39/205, ponen fin a la vía administrativa:

a. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que no tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
b. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.
c. Las resoluciones de los órganos administrativos que tengan superior jerárquico.

13.- Según el artículo 95.1 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que se producirá la caducidad del procedimiento, transcurridos:

a.- tres meses
b.- seis meses.
c.- nueve meses.

14.- Según el artículo 94.2 de la Ley 39/2015, si el escrito de iniciación de una solicitud se hubiera formulado por dos o más interesados:

a.-El desistimiento sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado
b.-El desistimiento afectará al conjunto de interesados que la hubiesen formulado en el mismo escrito.
c.-No se puede desistir a una solicitud una vez está presentada en la Administración por registro de entrada

15.- Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, derivada especialmente de...

a. El estado civil, la maternidad y la asunción de obligaciones familiares.
b. La edad y la nacionalidad exclusivamente.
c. El nivel de estudios y la situación laboral.

16.- ¿Cómo califica el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007 el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres?

a. Como un principio informador del ordenamiento jurídico.
b. Como un derecho fundamental.
c. Como un derecho de carácter exclusivamente laboral.

17.- De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, se considera discriminación directa por razón de sexo...

a. Cualquier disposición, criterio o práctica neutra que ponga a personas de un sexo en desventaja particular respecto a las del otro.
b. La situación en que se encuentra una persona a la que se trate de manera menos favorable que a otra en situación análoga por razón de sexo.
c. Todo trato desfavorable en el ámbito asociado al rendimiento de la empresa

18- Según el artículo 59 del TRLRHL, ¿cuáles de los siguientes impuestos son de carácter obligatorio para todos los ayuntamientos?

a. IBI, IAE e IVTM.
b. Solo el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
c. IBI, IVTM y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

19.- ¿Cuál es el tipo de gravamen máximo que se puede aplicar en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)?

a. El 2 %.
b. El 3 %.
c. El 4 %.

20.- En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), ¿en qué fecha exacta se produce el devengo del impuesto?

a. El 31 de diciembre de cada año.
b. El primer día del período impositivo (1 de enero).
c. El día en que se presenta la declaración de alta.

21. ¿Qué porcentaje máximo del coste real de las obras o servicios puede servir como límite total de la base imponible en las contribuciones especiales?

a. El 50 %.
b. El 75 %.
c. El 90 %.

22.- Según el artículo 44.1 TRLRHL, el importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo:

a. El valor de mercado del servicio prestado o de la actividad efectivamente realizada
b. El coste del servicio prestado o de la actividad realizada por la entidad.
c. El coste del servicio incrementado con un margen de beneficio del diez por ciento

23.- Según el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial correspondiente -:

a. Por un periodo de 15 días.
b. Por un periodo de un mes
c. Por un periodo de 15 días naturales.

24.- : Según el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente

a. El 1 de enero de cada año, aunque se apruebe en una fecha posterior
b. Una vez sea publicado en los boletines oficiales que correspondan.
c. Al día siguiente de su aprobación definitiva por el órgano competente.

25.- : Según el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: ¿Cuál de las siguientes modificaciones presupuestarias puede financiarse con remanente líquido de tesorería?

a. Trasferencias de crédito
b. Generaciones de crédito
c. Créditos extraordinarios

26.- : Según el artículo 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: Las Trasferencias de crédito que no afecten a distintos grupos de función, deberán aprobarse:

a. Siempre por el Pleno
b. Siempre por el Alcalde
c. El órgano competente se establecerá en la bases de ejecución del presupuesto

27.- ¿Cuál es la fase de ejecución del gasto en la que se reconoce formalmente la obligación de pago frente a un tercero?

a. Ordenación del pago. (P)
b. Disposición (D)
c. Reconocimiento y liquidación de la obligación (O)

28.- Según el artículo 185.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos corresponderá:

a. Al presidente de la corporación.
b. A la Junta de Gobierno
c. Al Pleno de la corporación.

29.- : Según el artículo 186 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: La función de ordenación de pagos compete:

a. Al concejal de hacienda
b. Al presidente.
c. A la Junta de Gobierno.

30.- Según el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto:

a. Antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente.
b. Antes de 1 de febrero del ejercicio siguiente
c. Antes del 31 de diciembre del año que se liquida.

31.- : Según el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: La cuenta general formada por la Intervención será sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local:

a. Antes del 31 de octubre
b. Antes del 1 de junio.
c. Antes del 31 de diciembre.

32.- : Según el artículo 223 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales y de todos los organismos y sociedades de ellas dependientes es función propia:

a. Del Concejal de Hacienda
b. Del Tribunal de Cuentas.
c. Del Interventor.

33.- Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el orden jurisdiccional civil será el competente para resolver:

a. Las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
b. Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas.
c. Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores

34.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los órganos de contratación ostentan la facultad de adjudicar los contratos y, entre otras prerrogativas, la de:

a. Interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista y acordar su resolución, de acuerdo con los límites fijados por la Ley.
b. Interpretar los contratos del sector público, suspender unilateralmente su ejecución por razones de urgencia, modificarlos libremente, sancionar las infracciones del contratista y acordar su resolución en todo caso.
c. Interpretar los contratos administrativos, ceder su posición contractual a terceros por interés general, modificar de mutuo acuerdo sus prestaciones y acordar su prórroga forzosa sin limitaciones.

35.- Conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo máximo en que debe notificarse la resolución de los procedimientos tributarios será el fijado por la normativa aplicable, sin que pueda exceder de:

a. Seis meses, salvo que esté establecido por una norma con rango de Ley o venga impuesto por el Derecho de la Unión Europea.
b. Seis meses, salvo que esté establecido por una norma con rango de Ley o por un Real Decreto del Consejo de Ministros.
c. Tres meses, salvo que esté establecido por una norma con rango de Ley o venga impuesto por el Derecho de la Unión Europea.

36.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará:

a. En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro.
b. En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, únicamente en el domicilio fiscal del obligado tributario.
c. Exclusivamente en el domicilio fiscal del obligado tributario o en su centro de trabajo habitual.

37.- De conformidad con Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas. A estos efectos, tendrán la consideración de definitivas:

a. Las practicadas en el procedimiento de inspección previa autorización del órgano competente, y las demás a las que la normativa tributaria otorgue tal condición.
b. Únicamente las practicadas en el procedimiento de inspección, salvo que la normativa del tributo otorgue expresamente ese carácter a las practicadas en otros procedimientos.
c. Las practicadas en el procedimiento de inspección salvo lo dispuesto en el artículo 101.4 de esta Ley, y las demás a las que la normativa tributaria otorgue tal condición.

38.- Establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en relación con las prohibiciones de contratar, que la condena por delitos de terrorismo o de asociación ilícita impedirá contratar con el sector público:

a. Únicamente si la sentencia condenatoria es firme y mientras dure el periodo de tiempo fijado en la propia resolución judicial.
b. Siempre que la sentencia sea firme, afectando la prohibición tanto a las personas jurídicas como a las personas físicas que sean administradores de hecho o de derecho de las mismas.
c. Desde el momento del auto de procesamiento, si bien la prohibición de contratar quedará en suspenso si se presta una garantía pecuniaria suficiente.

39.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato, el empresario podrá:

a. Basarse exclusivamente en sus propios medios materiales, económicos y humanos, sin que en ningún caso se admita la integración de la solvencia con medios ajenos al licitador.
b. Basarse en las solvencias y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esos medios.
c. Basarse en las solvencias de empresas del mismo grupo económico, requiriéndose de forma obligatoria que la empresa matriz ostente más del 75% de las participaciones sociales.

40.- Respecto de las formas de iniciación de los procedimientos de gestión tributaria, señale la respuesta correcta:

a. Todos los procedimientos de gestión tributaria se inician de oficio.
b. Los procedimientos de gestión tributaria pueden iniciarse de oficio o a instancia del obligado tributario.
c. Los procedimientos de gestión tributaria únicamente pueden iniciarse mediante declaración tributaria.

41.- Según la LGT, una autoliquidación presentada por el obligado tributario:

a. Siempre vincula irrevocablemente al obligado tributario.

b. Puede rectificarse cuando considere que ha perjudicado sus intereses legítimos, de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente.
c. Sólo puede modificarse mediante resolución judicial.

42.- ¿Cuál de los siguientes, NO constituye un procedimiento de gestión tributaria?

a. Verificación de datos.
b. Comprobación limitada.
c. Procedimiento sancionador.

43.- En el procedimiento de comprobación limitada, la Administración tributaria:

a. Puede efectuar un examen completo de la contabilidad mercantil, en cualquier caso.
b. Puede efectuar un examen de los registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria y de cualquier otro libro, registro o documento de carácter oficial.
c. Tiene las mismas facultades que en un procedimiento inspector.

44.- De conformidad con el artículo 134 de la Ley General Tributaria, ¿en qué supuesto puede la Administración tributaria iniciar un procedimiento de comprobación de valores?

a. Cuando considere necesario comprobar el valor de los bienes, rentas, productos y demás elementos determinantes de la obligación tributaria, utilizando los medios previstos en el artículo 57 de la LGT, salvo que el obligado tributario haya declarado conforme a los valores publicados por la propia Administración actuante.
b. Cuando detecte cualquier incumplimiento de las obligaciones tributarias, con independencia de que exista discrepancia en la valoración declarada.
c. Cuando pretenda determinar la existencia de infracciones tributarias y aplicar las sanciones correspondientes.

45.- De conformidad con la Ley General Tributaria, ¿cuáles son las formas de terminación del procedimiento de comprobación limitada?

a. Exclusivamente mediante resolución expresa de la Administración tributaria, una vez finalizadas las actuaciones de comprobación.
b. Mediante resolución expresa de la Administración tributaria, por caducidad si transcurre el plazo máximo sin notificarse resolución expresa o por el inicio de un procedimiento inspector que incluya el objeto de la comprobación limitada.
c. Mediante liquidación provisional o definitiva, sin que pueda producirse la caducidad del procedimiento.

46.- Una vez dictada resolución en un procedimiento de comprobación limitada:

a. La Administración no podrá volver a regularizar en ningún caso.
b. La Administración podrá comprobar nuevamente los mismos elementos tributarios cuando, en un procedimiento de comprobación limitada o inspección posterior descubra nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en dicha resolución.
c. El obligado tributario pierde el derecho a recurrir.

47.- Con carácter general el plazo de duración de las actuaciones inspectoras es:

a. Doce meses.
b. Dieciocho meses.
c. Veinticuatro meses.

48.- Las medidas cautelares adoptadas durante un procedimiento inspector deben:

a. Ser proporcionadas y limitadas temporalmente a los fines anteriores sin que puedan adoptarse aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación.
b. Mantenerse indefinidamente.
c. Ser autorizadas siempre por el juez.

49.- Cuando el obligado tributario muestra su conformidad con la propuesta de regularización formulada por la Inspección, se formaliza:

a. Un acta de acuerdo.
b. Un acta de conformidad.
c. Un acta de disconformidad

50.- ¿Cuál de los siguientes no constituye un medio de revisión de los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones tributarias conforme a la artículo 213 de la LGT?

a. Los procedimientos especiales de revisión.
b. El recurso de reposición.
c. El recurso de alzada.

51.- El recurso de reposición contra un acto tributario tiene carácter:

a. Obligatorio antes de acudir a la vía económico-administrativa
b. Potestativo y, si se interpone, debe preceder a la reclamación económico-administrativa.
c. Potestativo, pudiendo interponerse simultáneamente con la reclamación económico-administrativa.

52,- ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de reposición?

a. Un mes contado a partir el día siguiente al de la notificación del acto recurrible.
b. Un mes contado a partir el día de la notificación del acto recurrible.
c. Tres meses contados a partir del día de la notificación del acto recurrible.

53,- ¿Qué órganos es competente para resolver el recurso de reposición?

a. El tribunal económico-administrativo competente.
b. El órgano que dictó el acto recurrido.
c. El superior jerárquico del órgano que dictó el acto.

54.- ¿Desde cuándo se inicia, con carácter general, el cómputo del plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de una deuda tributaria liquidada?

a. Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en periodo voluntario.
b. Desde el día siguiente a la notificación de la liquidación.
c. Desde el día siguiente al inicio del periodo ejecutivo.

55.- ¿Cuál de las siguientes actuaciones interrumpe el plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago?

a. Cualquier actuación administrativa interna, aunque no sea conocida formalmente por el obligado.
b. Cualquier acción de la administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda.
c. Únicamente la notificación de la providencia de apremio.

56.- Producida una interrupción del plazo de prescripción del derecho a exigir el pago, con carácter general, el nuevo plazo:

a. Comienza a contarse desde el momento en que se produjo la actuación interruptiva.
b. Se reinicia desde el día siguiente a aquel en que cesó la actuación interruptiva.
c. No vuelve a comenzar hasta que se dicte una nueva liquidación.

57.- Las deudas tributarias de un obligado tributario pueden extinguirse por compensación:

a. Únicamente cuando la deuda se encuentre en periodo ejecutivo.
b. Total o parcialmente con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado.
c. Únicamente cuando la deuda se encuentre en periodo voluntario

58.- La declaración total o parcial de crédito incobrable produce como efecto:

a. La extinción definitiva e inmediata de la deuda.
b. La baja en cuentas del crédito en la cuantía correspondiente, sin impedir su rehabilitación mientras no haya prescrito.
c. La condonación automática de la deuda.

59.- De conformidad con el artículo 65.1 de la Ley General Tributaria, las deudas tributarias pueden aplazarse o fraccionarse:

a. Cuando el obligado tributario carezca de bienes suficientes en todo caso, para deudas en periodo ejecutivo.
b. Cuando la situación económico-financiera del obligado tributario le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.
c. Siempre que la deuda supere una determinada cuantía.

60.- De acuerdo con el artículo 70.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando una norma exija la remisión de un expediente electrónico:

a. Bastará con remitir los documentos esenciales acompañados de una relación descriptiva firmada por el instructor.

b. Se remitirá completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice igualmente autentificado; la autenticación del índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente desde su firma y permitirá su recuperación.
c. Será suficiente con un índice numerado, sin necesidad de autenticación, siempre que todos los documentos estén firmados electrónicamente.

Preguntas suplentes:

1.- Según el artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cada cuánto tiempo debe ser objeto de renovación periódica la inscripción en el Padrón Municipal de habitantes de un extranjero no comunitario sin autorización de residencia de larga duración?

a. Cada año.
b. Cada seis meses.
c. Cada dos años.

2.- Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho:

a. A ser notificado de la identidad del denunciante en los procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora.
b. A aportar documentos en cualquier fase del procedimiento, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
c. A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

3.- Vista la regulación contenida en el art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en materia de nulidad y anulabilidad de los actos administrativos:

a. El defecto de forma sólo determinará la nulidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
b. Son nulos de pleno derecho los actos presuntos de las Administraciones Públicas contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
c. Son nulos los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico incluso la desviación de poder.

4.- Según el artículo 96.1.2 y 3 de la Ley 39/2015 la tramitación simplificada se produce:

a. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento.
b. Cuando razones de interés particular o la complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento.
c. La tramitación simplificada del procedimiento no es posible en ningún caso.

5.- Según el artículo 117 de la Ley 39/2015 la suspensión de la ejecución:

a. La interposición de cualquier recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado.

b. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
c. La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso.